



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN
SALA UNITARIA DE DECISIÓN

Medellín, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés

| |
|--|
| Radicado: 05001-31-03-015-2018-00340-01 |
| Decisión: Revoca |
| <p>Reseña: Deben diferenciarse dos tipos de medidas cautelares contempladas en la ley que, aunque similares, tienen particularidades que las distinguen en procedencia y aplicación. Se trata de los embargos; <i>a)</i> de remanentes o bienes que se llegaren a desembargar del artículo 466 del CGP y; <i>b)</i> el de derechos o créditos que la persona contra quien se pide tiene en otro proceso, consagrado en el artículo 593.5 del mismo código.</p> <p>1) En el primero, debe haber un embargo perfeccionado y vigente, en el segundo, se trata de un derecho o crédito, no necesariamente derivado de una medida cautelar; 2) En el primero, siempre se trata de bienes o derechos del demandado; en el segundo, se trata de créditos o derechos tanto del demandante como del demandado y; 3) En el primero, el proceso tiene que estar en curso, en el segundo, puede estar terminado o no, en tanto lo importante es que el derecho o crédito pueda considerarse actual y en cabeza de la persona contra la que se deprecia la medida.</p> <p>El juez, previo a convertir o trasladar los dineros a la cuenta del juzgado que los embargó por tratarse de un derecho que tiene una determinada parte dentro del proceso, deberá tener en cuenta si el depósito judicial prescribió o no de pleno derecho a favor de la Rama Judicial. Solamente procederá la conversión del dinero si se ha superado lo concerniente a las obligaciones legales que se derivan de la Ley 1743 de 2014.</p> |

ASUNTO

Resolver el recurso de apelación interpuesto por el tercero acreedor del demandado en contra del auto del 3 de noviembre de 2022 proferido por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Medellín.

ANTECEDENTES

1. El 2 de septiembre de 2019, el *a quo* terminó el presente proceso ejecutivo por desistimiento tácito y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares. Pese a que se interpuso recurso de apelación, el demandante desistió de su impugnación, en virtud de una transacción celebrada entre las partes.
2. El 15 de septiembre de 2020 el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Sentencia de Medellín, en el proceso 020-2016-00774, decretó el embargo de los dineros que le correspondan al aquí demandado Edgar de Jesús Moreno Arenas en el presente proceso.
3. Posteriormente, el aquí demandado solicitó al *a quo*, con ocasión de la transacción celebrada entre las partes, entregar los dineros que estén a su favor a la parte demandante Capicol SAS.
4. El *a quo* se negó a tomar nota del embargo decretado por el juzgado municipal de ejecución porque el proceso está terminado por desistimiento tácito. Accedió a la pedido por el demandado y ordenó la entrega de los dineros al demandante.
5. El tercero acreedor en el proceso 020-2016-00774 reiteró su petición de embargar los depósitos judiciales que están a nombre del demandado en el presente proceso; y el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Sentencia de Medellín volvió a decretar el embargo de los depósitos judiciales, o en su defecto, los dineros que se llegaren a desembargar al demandado.
6. El 3 de noviembre de 2022 el *a quo* reiteró que no era posible tomar nota del embargo, en tanto el proceso está terminado desde el 2 de septiembre de 2019.

7. La decisión fue recurrida por el tercero acreedor en el proceso 020-2016-00774, señalando que no existe impedimento legal para dicha cautela y que la terminación quedó ejecutoriada con el auto de cumplimiento al superior el 11 de julio de 2022, cuando ya se habían remitido los oficios de embargo de los dineros a favor del demandado.

CONSIDERACIONES

1. La Sala de Decisión tiene que resolver el siguiente problema jurídico: ¿Es posible decretar el embargo de dineros que están a favor del demandado, luego de terminado el proceso y levantadas las medidas cautelares? Y, en ese contexto, ¿El *a quo* debió tener en cuenta dicho embargo y remitir a la autoridad judicial requirente los dineros que reposan en el presente proceso a favor del demandado?

2. Para el efecto hay que diferenciar dos tipos de medidas cautelares contempladas en la ley que, aunque similares, tienen particularidades que las distinguen en procedencia y aplicación. Se trata de los embargos; *a)* de remanentes o bienes que se llegaren a desembargar del artículo 466 del CGP y; *b)* el de derechos o créditos que la persona contra quien se pide tiene en otro proceso, consagrado en el artículo 593.5 del mismo código.

La textura de ambas normas, su consagración legislativa y sus particularidades dan cuenta de una diferencia notable.

Por un lado, se tiene el artículo 466 del CGP que se refiere a bienes cuyo embargo se encuentra vigente en un proceso y un tercero, quien pretende perseguirlos ejecutivamente en otro, solicita que se dejen por cuenta de este último trámite una vez desembargados o que se le remita el sobrante o remanente, luego de que sean rematados. La norma preceptúa en lo pertinente:

Artículo 466: Quien pretenda perseguir ejecutivamente **bienes embargados** en otro proceso y no quiera o no pueda promover la acumulación, podrá pedir el embargo de los que por cualquier causa se llegaren a desembargar y el del remanente del producto de los embargados.

...Practicado el remate de todos los bienes y cancelado el crédito y las costas, el juez remitirá el remanente al funcionario que decretó el embargo de este.

Cuando el proceso termine por desistimiento o transacción, o si después de hecho el pago a los acreedores hubiere bienes sobrantes, estos o todos los perseguidos, según fuere el caso, **se considerarán embargados por el juez que decretó el embargo del remanente o de los bienes que se desembarguen**, a quien se remitirá copia de las diligencias de embargo y secuestro para que surtan efectos en el segundo proceso. Si se trata de bienes sujetos a registro, se comunicará al registrador de instrumentos públicos que el embargo continúa vigente en el otro proceso... (Resaltos del Tribunal).

En todo caso, el artículo 466 del CGP parte de un supuesto claro: los bienes tienen que estar embargados, el proceso no puede haber terminado, en tanto la teleología de la disposición es la existencia de la medida y la intención del tercero interesado en perseguir los mismos bienes.

Aunque con similitudes, por otro lado, se tiene la medida contemplada en el numeral 5° del artículo 593 del CGP. A diferencia del anterior el supuesto de hecho de esta norma es más amplio y no se limita a bienes embargados ni específicamente al producto de éstos, sino a cualquier derecho o crédito que una parte tenga en determinado proceso; no importa si el mismo está terminado o no y, tampoco, si el titular es el demandante o el demandado. Al siguiente tenor literal preceptúa la disposición:

Artículo 593: Para efectuar embargos se procederá así... 5. **El de derechos o créditos que la persona contra quien se decreta el embargo persiga o tenga en otro proceso** se comunicará al juez que conozca de él para los fines consiguientes, y se considerará perfeccionado desde la fecha de recibo de la comunicación en el respectivo despacho judicial.

Retomando la textura y contenido de la norma como criterio diferenciador, nótese cómo el 593.5 citado evidencia un supuesto más amplio que el artículo 466 *ejusdem*. Resáltense: *i*) el vocablo “persona” utilizado por el legislador, que implica que el titular del derecho o crédito puede ser el extremo activo o pasivo; *ii*) y la expresión “otro proceso” que no limita la procedencia a si el trámite está vigente o ya se encuentra terminado. De hecho, es una vez finalizado el proceso que se tiene certeza del derecho o crédito que puede tener la persona contra quien se pide la medida, importante diferencia respecto al embargo de remanentes.

Es susceptible de ser embargado, bajo la égida del artículo 593.5 del CGP, por ejemplo: *a*) el dinero que corresponde a un acreedor producto del pago de un crédito que fue objeto de ejecución o; *b*) el dinero que puede resultar a favor del demandado luego de terminado el proceso por desistimiento tácito, en tanto se trata de un derecho que le asiste en el marco de esa terminación; no hay óbice para tenerlo como prenda general del acreedor y ponerlo por cuenta de otro proceso jurisdiccional adelantado en contra del mismo demandado, en tanto encaja en el supuesto normativo *ejusdem* y cumple con la finalidad de asegurar la eficacia de las decisiones jurisdiccionales.

Se diferencian, entonces, los supuestos del 466 y del 593.5 del CGP en lo siguiente: 1) En el primero, debe haber un embargo perfeccionado y vigente, en el segundo, se trata de un derecho o crédito, no necesariamente derivado de una medida cautelar; 2) En el primero, siempre se trata de bienes o derechos del demandado; en el segundo, se trata de créditos o derechos tanto del demandante como del demandado y; 3) En el primero, el proceso tiene que estar en curso, en el segundo, puede estar terminado o no, en tanto lo importante es que el derecho o crédito pueda considerarse actual y en cabeza de la persona contra la que se deprecia la medida.

3. Ahora bien, esos “derechos” que se tienen en determinado proceso, a los que se refiere el artículo 593.5 del CGP pueden tratarse, como ya se explicó, de dineros a favor de las partes que se encuentran en la cuenta bancaria que tiene cada despacho judicial en el Banco Agrario de Colombia, contenidos en títulos o depósitos judiciales respecto a los cuales los funcionarios tienen unas obligaciones legales respecto a su custodia. Una de esas obligaciones es la contemplada en el parágrafo 2º del artículo 3 de la Ley 1743 de 2014 que modificó el artículo 192 de la Ley 270 de 1992:

Todos los jueces de la República estarán obligados a reportar al Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus veces, dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de esta ley, y de manera periódica cada semestre, la relación de todos los depósitos judiciales en condición especial y los depósitos judiciales no reclamados, so pena de las sanciones disciplinarias y fiscales a las que haya lugar.

Según el artículo 5º de la misma Ley 1743 de 2014 que adicionó el artículo 192B de la Ley 270 de 1992: “Los depósitos judiciales que no hayan sido reclamados por su beneficiario dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de terminación definitiva de cualquier proceso menos el laboral, **prescribirán de pleno derecho a favor de la Rama Judicial**, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia”.

Las disposiciones frente a “depósitos judiciales en condición especial” (art. 4 Ley 1743 de 2014) y “depósitos judiciales no reclamados (art. 5 de la misma ley), en especial su proceso de prescripción, limitan el embargo de que trata el artículo 593.5 del CGP.

El juez, previo a convertir o trasladar los dineros a la cuenta del juzgado que los embargó por tratarse de un derecho que tiene una determinada parte dentro del proceso, deberá tener en cuenta si el depósito judicial prescribió

o no de pleno derecho a favor de la Rama Judicial. Solamente procederá la conversión del dinero si se ha superado lo concerniente a las obligaciones legales que se derivan de la Ley 1743 de 2014.

5. En el caso concreto, desde el 27 de octubre de 2020, el tercero acreedor en el proceso 020-2016-00774 comunicó al Juzgado Quince Civil del Circuito de Medellín que, mediante auto del 31 de agosto de 2020 (Archivo 04.1 “trámite digital”), el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín resolvió:

PRIMERO: DECRETAR el embargo de los REMANENTES o de los bienes que se le llegaren a desembargar a la parte demandada EDGAR DE JESÚS MORENO ARENAS, dentro del proceso radicado 05001 31 03 015 2018 00340 00, del Juzgado 15º Civil del Circuito de Medellín.

SEGUNDO: DECRETAR el embargo de los dineros que le correspondan al demandado EDGAR DE JESÚS MORENO ARENAS, dentro del proceso radicado 05001 31 03 015 2018 00340 00, del Juzgado 15º Civil del Circuito de Medellín; producto del levantamiento de las medidas cautelares por la terminación del proceso por desistimiento tácito.

La medida cautelar decretada por el juzgado de ejecución en el numeral primero del auto del 31 de agosto de 2020 corresponde a la consagrada en el artículo 466 del CGP y, en efecto, era improcedente como lo declaró el *a quo* mediante auto del 11 de julio de 2022, porque el proceso estaba terminado desde el 2 de septiembre de 2019 y dicha decisión cobró ejecutoria en junio de 2020 cuando el apelante desistió de su recurso.

Pese a lo anterior, en esa providencia del 11 de julio de 2022 no hubo pronunciamiento sobre la medida decretada en el numeral segundo del auto de la juez de ejecución, que se trata de la contemplada en el artículo 593.5 del CGP: el embargo de un derecho que tiene el demandado Edgar de Jesús Moreno Arenas por la terminación del presente proceso por desistimiento tácito; los dineros que le corresponden por el levantamiento de las medidas.

El *a quo* despachó desfavorablemente lo solicitado bajo un único argumento: no es posible el embargo de remanentes, pero no tuvo en cuenta el embargo de los derechos que, en virtud del presente proceso, le corresponden al demandado.

El tercero acreedor del proceso 020-2016-00774 tuvo que insistir en su petición, por lo que el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín tuvo que insistir en especificar que se trataba del “embargo de los depósitos judiciales”, a lo que, en el auto aquí recurrido, el *a quo* no accedió, argumentando nuevamente que el proceso está terminado y que el demandado había solicitado que los dineros se entregaran al demandante, por lo que los mismos no reposaban a su favor.

Al respecto, deben tenerse en cuenta tres aspectos fundamentales:

- 1) Como viene de explicarse, que el proceso estuviese terminado no es óbice para que se embarguen los derechos -dineros- que le corresponden al demandado en el presente proceso (art. 593.5 CGP);
- 2) La solicitud del demandado de que los depósitos judiciales se entregaran al demandante fue presentada el 12 de enero de 2022, es decir, más de un año después de que el tercero acreedor pusiera de presente al *a quo* el embargo de dichos dineros, decretado por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín el 31 de agosto de 2021. De conformidad con el artículo 593.5 del CGP, “se considerará perfeccionado desde la fecha de recibo de la comunicación en el respectivo despacho judicial”, en este caso, el 27 de octubre de 2021 (Archivo 4, página 2, “trámite digital”).
- 3) La parte demandada pidió que los dineros se entregaran a la parte demandante “en razón a que el proceso se encuentra terminado y con ocasión de la transacción que voluntariamente se firmó entre las partes”. Sin

embargo, el proceso no terminó por transacción, sino por desistimiento tácito; además de que, dicha transacción (archivo 3, página 15, cuaderno principal), en ninguna de sus siete cláusulas hace alusión a que parte del acuerdo incluya la entrega al demandante del dinero que está a favor del demandado:

TRANSACCIÓN

PRIMERO: El demandado EDGAR DE JESUS MORENO ARENAS pagará a favor de demandante CAPICOL S.A.S el dinero producto de la venta de los TAXIS de placas WZD178 y TSZ839, esto es la suma de (\$ 150.000.000) Ciento cincuenta millones de pesos M/L.

SEGUNDO: La parte demandante CAPICOL S.A.S recibe como pago total y único, de la OBLIGACION DINERARIA que por todos los conceptos le adeude la parte demandada señor EDGAR DE JESUS MORENO ARENAS, la suma de (\$ 150.000.000) Ciento cincuenta millones de pesos M/L.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, una vez aprobada la transacción, no queda obligación alguna pendiente por parte del demandado EDGAR DE JESUS MORENO ARENAS frente al demandante CAPICOL S.A.S, respecto del título valor pagare N°636R, objeto del proceso ejecutivo. Por lo tanto se entiende extinguida la obligación.

CUARTO: De conformidad con lo transado, las partes de este proceso ejecutivo prendario solicitan al despacho, terminar el proceso, por transacción de la obligación entre las partes.

QUINTO: Se le solicita al señor Juez, **oficiar de conformidad** para el levantamiento de las medidas cautelares de embargo que recaen sobre los TAXIS de placas WZD178 y TSZ839 matriculados en la secretaria de movilidad y tránsito del municipio de Medellín; entregando los respectivos oficios a la parte demandante o en su defecto al comprador de los vehículos.

SEXTO: Se le solicita al señor Juez, **oficiar de conformidad** para el levantamiento de las medidas secuestro que recaen sobre los TAXIS de placas WZD178 y TSZ839, oficiando a los respectivos secuestres para que procedan con la entrega de los vehículos a la parte demandante o en su defecto al comprador.

SEPTIMO: Las partes del proceso de manera libre, consiente y voluntaria RENUNCIAMOS a los términos de traslado y ejecutoria de la providencia aprobatoria de este contrato de transacción.

Dando fe de lo anterior, se firma en Medellín a los 4 días del mes de septiembre de 2019.

El auto de primera instancia debe ser revocado, en tanto el *a quo* solo analizó el embargo decretado bajo el supuesto normativo del artículo 466 del CGP, sin tener en cuenta el embargo del derecho que tiene el demandado en el presente proceso, de conformidad con el artículo 593.5 *ejusdem*.

Era procedente tomar nota del embargo del derecho que le corresponde al demandado en el presente proceso, inclusive, desde el 27 de octubre de 2020 que el tercero acreedor en el proceso 020-2016-00774 comunicó la medida. La terminación cobró ejecutoria con el desistimiento del recurso en junio de ese mismo año y ello implica que el levantamiento de la medida cautelar hacía indiscutible el derecho del demandado Edgar de Jesús Moreno Arenas a que se le reintegraran los dineros que le fueron retenidos. Al considerarse

ese derecho parte de su patrimonio, se le cataloga también como prenda del acreedor, susceptible de la medida cautelar decretada.

Al tratarse de dineros consignados como depósitos judiciales en el Banco Agrario, siempre debe tenerse presente si los mismos deben ser reportados como depósitos judiciales “en condición especial” o “no reclamados”, para los efectos de su prescripción a favor de la Rama Judicial, en virtud de la obligación legal que el asiste a los funcionarios consagrada en el parágrafo 2º del artículo 3 de la Ley 1743 de 2014 que modificó el artículo 192 de la Ley 270 de 1992.

En el presente evento no pueden tenerse los depósitos judiciales como “en condición especial” o “no reclamados”, en tanto la ejecutoria del auto de terminación por desistimiento tácito se surtió en junio de 2020, para el 31 de agosto del mismo año ya se había decretado el embargo de esos dineros por parte del Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín y, el 27 de octubre de esa misma anualidad, el tercero acreedor ya estaba solicitando la conversión de los títulos al proceso judicial en el que es demandante. No se cumplen los supuestos de los artículo 4 y 5 de la Ley 1743 de 2014, por lo que la conversión o traslado de los dineros es procedente.

En conclusión, se **revocará** el auto del 3 de noviembre de 2022 proferido por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Medellín; y en su lugar, se tomará nota del embargo decretado por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Sentencia de Medellín de los dineros que le corresponden al demandado **Edgar de Jesús Moreno Arenas** en el presente proceso como consecuencia de la terminación de éste por desistimiento tácito.

Y, en consecuencia, se **ordenará** la conversión, a la cuenta del Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín, de los dineros que reposen en la cuenta del juzgado de primera instancia para el

presente proceso y que correspondían al aquí demandado como consecuencia del levantamiento de las medidas cautelares.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria de Decisión;

RESUELVE:

Primero: Revocar el auto 3 de noviembre de 2022 proferido por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Medellín, por los motivos expuestos en la presente providencia. En su lugar, se **toma nota** del embargo decretado por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Sentencia de Medellín de los dineros que le corresponden al demandado **Edgar de Jesús Moreno Arenas** en el presente proceso como consecuencia de la terminación de éste por desistimiento tácito.

Segundo: Ordenar la conversión, a la cuenta del Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín, de los dineros que reposen en la cuenta del juzgado de primera instancia para el presente proceso y que correspondían al aquí demandado como consecuencia del levantamiento de las medidas cautelares.

Tercero: Sin condena en costas a falta de su causación. Devuélvase el expediente al juzgado de origen.

Notifíquese y cúmplase



Martín Agudelo Ramírez

Magistrado